

## 25ª REUNION — 10ª SESION ORDINARIA. — JULIO 5 DE 1905

### PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANGEL SASTRE

**Diputados presentes:** Acuña, Aldao, Alvarez (A), Alvarez (J. M.), Amenedo, Argañarás, Ballesta, del Barco, Barraquero, Barraza, Bejarano, Berrondo, Campos, Cantón, Carbó, Carlés, Carreño, Castro, Cernadas, Cordero, Coronado, Correa, Crouzeilles, Delcasse, Demaria, Domínguez, Elordi, Ferrari, Figueroa, Fonrouge, Fonseca, Galiano, García Vieyra, Gigena, Gouchón, Grandoli, Gutiérrez, Hernández, Iriondo, Iturbe, Lacasa, Lagos, Lamas, Latorre, Ledesma, Leguizamón, Lezica, Lucero, Machado, Martínez (J.), Martínez (J. A.), Martínez (J. E.), Martínez Rufino, Méndez, Moyano, Mugica, Naón, O'Farrell, Olmos, Padilla, Palacios, Parera, Parera Denis, Peluffo, Pera, Pinedo (F.), Pinedo (M. A.), Ponce, de la Riestra, Robirosa, Roca, Rodas, Roldán, Romero, Seguí, de la Serna, Silva, Silvilat Fernández, Uriburu (F.), Uriburu (P.), Urquiza, Varela, Varela Ortiz, Vedia, Victorica, Vieyra Latorre, Villanueva, Vocos Giménez, Yofre, Zavalla.—**Ausentes con licencia:** del Carril, Paz.—**Con aviso:** Argerich, Astrada, Dantas, Garzón, Guevara, Mohando, Ovejero.—**Sin aviso:** Astudillo, Bustamante, Comaleras, Contte, Fleming, García (T.), González Bonorino, Irigoyen, Laferrère, Luna, Luque, Luro, Martínez (M.), Monsalve, Oliver, Rivas.

### SUMARIO

- 1.—Aprobación del acta de la sesión anterior.
- 2.—Mensaje del poder ejecutivo y proyecto de ley ampliando los ítems 1.º y 5.º del inciso 16 del presupuesto de instrucción pública: el primero en 60.000 y el segundo en 12.000 pesos, con destino á la adquisición de mobiliario, útiles de enseñanza, etc.
- 3.—Mensaje del poder ejecutivo invitando á la cámara al tedeum del 9 de julio.
- 4.—Comunicaciones del senado.
- 5.—Despacho de las comisiones.
- 6.—Moción para tratar sobre tablas el proyecto de ley del poder ejecutivo, antes mencionado.
- 7.—Moción para tratar sobre tablas un despacho de la comisión de peticiones, acordando un subsidio al hospital San Martín, del Paraná.
- 8.—Rendición de cuentas por el secretario-habilitado de la cámara.
- 9.—Peticiones particulares.
- 10.—Proyecto de ley, por el señor diputado M. Carlés, autorizando la erección de una estatua al prócer don Esteban Echeverría.
- 11.—Moción para tratar sobre tablas el proyecto antes mencionado.
- 12.—Proyecto de ley, por el señor diputado E. Gouchon, disponiendo la formación de un fondo para la construcción de líneas férreas, puertos y canales.
- 13.—Moción para tratar sobre tablas un proyecto de ley relativo al servicio de aguas corrientes en la ciudad del Paraná.
- 14.—Aprobación del proyecto del poder ejecutivo, mencionado al principio, referente á la adquisición de mobiliario y útiles de enseñanza, etc.
- 15.—Aprobación de un despacho de la comisión de peticiones, en el proyecto de ley acordando un subsidio para instalación del hospital San Martín, en el Paraná.
- 16.—Aprobación del proyecto de ley relativo á la erección de un monumento á don Esteban Echeverría.
- 17.—Aprobación de un despacho de la comisión de obras públicas, en el proyecto de ley referente á la construcción de diversas obras para la provisión de aguas corrientes á la ciudad del Paraná.
- 18.—Consideración del despacho de la comisión de negocios constitucionales en el proyecto de ley de reforma de la ley de elecciones.

se incorporaron, desde un principio al régimen de esa ley. Posteriormente se autorizó una ampliación de un millón doscientos mil pesos destinada exclusivamente á la construcción del alcantarillado, es decir, de cloacas y obras de desagüe, porque tenía dicha ciudad las de aguas corrientes desde hacía veinte años. No fué solicitada pues la inclusión de obras de servicio de agua, sin embargo de tener nociones de su deficiencia.

Ultimamente, la inundación y los mismos trabajos de las obras de alcantarillado han destruido mucha parte de la cañería y la casa de máquinas, y esta inundación ha obrado de tal manera, que ha sido necesario poner máquinas suplementarias y crear un provisorio para poder seguir proveiendo de agua á la ciudad del Paraná.

En vista, entonces, de este verdadero desastre sufrido por las obras de provisión de agua de aquella ciudad, la comisión nacional de obras de salubridad tomó la ingerencia correspondiente, inspeccionó y estudió el proyecto relativo á lo que podría hacerse, resultando que se necesita la suma de setecientos mil pesos para los trabajos de construcción, reparación y complementación, es decir, hablando la verdad, resultó que es casi necesario hacer engran parte de nuevo todas las obras de aguas corrientes de la ciudad, adquiriendo la maquinaria y cañería nueva, y reconstruyendo depósitos y filtros.

Los fondos votados por la ley á que me he referido, determinados en su empleo preciso no eran para atender á este nuevo servicio, de manera que se necesita una ampliación de la emisión para poder adquirir esas máquinas y esa cañería necesaria licitar con recursos las obras para la provisión regular de las aguas á la población de la ciudad mencionada.

Estos setecientos mil pesos se incorporan al régimen de la ley, y es claro que, tratándose de una ciudad de la importancia del Paraná, se puede asegurar que el servicio de esos nuevos fondos está perfectamente asegurado, y tendrán los mismos prestigios que los anteriores.

La cámara puede, pues, votar esto con toda tranquilidad, y si por sus efectos y conveniencias he pedido la urgencia para la sanción de este proyecto, es por ser necesario que antes del verano próximo estén aquí las máquinas, que

deben encargarse inmediatamente á Europa, así como la cañería y todo lo necesario para tales obras, á fin de que la ciudad mencionada no carezca, en la estación á que me refiero, de este elemento tan esencial de higiene y de vida.

En consecuencia, en nombre de la comisión de obras públicas aconsejo á la honorable cámara que vote este despacho, convirtiendo en ley este proyecto de verdadera necesidad para esa importante ciudad de la República.

**Sr. Presidente**—Se votará.

—Se aprueba en general y en particular el despacho en discusión.

**Sr. Secretario Ovando**—Queda convertido en ley.

18

## ORDEN DEL DIA

### REFORMA DE LA LEY DE ELECCIONES

**Sr. Presidente**—La honorable cámara había designado la sesión de hoy para ocuparse de la ley electoral.

—Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro del interior, doctor Rafael Castillo.

*A la honorable Cámara de diputados.*

La mayoría de vuestra comisión de negocios constitucionales ha estudiado los proyectos de reforma electoral; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente:

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de diputados, etc.*

Artículo 1.º La capital y las provincias se consideran como distritos electorales de un solo estado para elegir electores calificados de senador por la capital, diputados al congreso y electores calificados de presidente y de vicepresidente de la nación.

Art. 2.º Cada distrito se dividirá en secciones electorales. Cada parroquia en las ciudades y cada departamento en las campañas formarán una sección electoral.

Art. 3.º Cada distrito elegirá el número de electores calificados de presidente y vicepresidente de la nación y el número de diputados que le correspondan en la renovación bienal

de la cámara de diputados. El distrito de la capital elegirá los electores calificados de senador, en la forma prescrita para la elección de presidente de la nación.

Art. 4.º Cada elector votará por el número de diputados ó de electores calificados que corresponda al distrito.

Art. 5.º Abiertos los pliegos á que se refiere el inciso 2.º del artículo 82 de la ley 4161, la junta hará inmediatamente el escrutinio general, terminándolo y proclamando en la misma sesión los diputados y los electores calificados, que resulten electos por mayor número de votos en el distrito.

Art. 6.º Suprímese la palabra "circunscripción" y las preposiciones, artículos y conjunciones que le siguen ó anteceden, en los artículos 45 y 46 de la ley 4161. Substitúyese la palabra "circunscripción", por la palabra "sección" en el artículo 47; y por la palabra "distrito", en el inciso 3.º del artículo 55, en el artículo 66 y en el artículo 82 de la misma ley.

Art. 7.º Derógase los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, el inciso 2.º del artículo 73, inciso 3.º del artículo 82 y las disposiciones contrarias á la presente del inciso 1.º del artículo 55 y del inciso 3.º del artículo 73 de la ley 4161.

Art. 8.º Comuníquese al poder ejecutivo.

Sala de la comisión, junio 17 de 1905.

José Fonrouge.—A. Lucero.—  
José Yofre.

#### A la honorable Cámara de diputados.

Vuestra comisión de negocios constitucionales, en minoría, ha estudiado la reforma del régimen electoral propuesta en los diversos proyectos sometidos á su dictamen; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente:

#### PROYECTO DE LEY

##### *El Senado y Cámara de diputados, etc.*

Artículo 1.º Declárase necesaria la revisión parcial de la constitución, para reformar las disposiciones que establecen como régimen exclusivo de las elecciones nacionales el de la simple pluralidad de sufragios. (Artículo 37 y correlativos).

Art. 2.º La convención reformadora se reunirá en la capital federal dentro de los cuatro meses subsiguientes á la promulgación de la presente ley, debiendo el poder ejecutivo convocar al pueblo de la república á las elecciones respectivas con sesenta días de anticipación al que se fije para el acto electoral.

Art. 3.º La capital federal y las provincias tendrán en la convención una representación numérica igual á la que actualmente les corresponde en el congreso de la nación.

Art. 4.º La elección de convencionales se practicará en la forma establecida por la ley para la elección de electores de presidente; el

cargo de convencional será gratuito y requerirá las condiciones de elegibilidad exigidas para ser diputado nacional.

Art. 5.º La convención deberá terminar su cometido dentro de los tres meses subsiguientes al día de su instalación.

Art. 6.º Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se harán de rentas generales y se imputarán á la misma.

Art. 7.º Comuníquese, etc.

A. Mugica—M. de Vedia. (Por sus razones).

#### PROYECTO DE LEY

##### *El Senado y Cámara de diputados, etc.*

Artículo 1.º Deróganse los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55—en sus incisos 1.º y 3.º, 73—en su inciso 2.º, 82—en sus incisos 2.º y 3.º, 104, 108—en sus incisos 3.º y 6.º, 110—en su inciso 1.º y 113 de la ley 4161; y en su lugar de numeración, sanciónanse los siguientes:

Art. 2.º (Ex-18). La capital y las provincias se consideran como distritos electorales de un solo estado, cuyos electores forman un colegio electoral nacional único, para elegir electores calificados de senador de la capital, diputados al congreso y electores calificados de presidente y vicepresidente de la nación.

Art. 3.º (Ex-19). No se alterará la representación de los distritos electorales.

Art. 4.º (Ex-20). A los efectos de la inscripción y de la votación, cada distrito se dividirá en circunscripciones y en secciones. Cada parroquia en las ciudades y cada departamento ó juzgado de paz en las campañas formarán una sección electoral.

Art. 5.º (Ex-21). Cada distrito elegirá el número de electores calificados de presidente y de vicepresidente de la nación y el número de diputados que le corresponda en la renovación bienal de la cámara de diputados.

Art. 6.º (Ex-22). Las vacantes que ocurriesen se elegirán por todo el distrito.

Art. 7.º (Ex-23). Cuando las vacantes coincidiesen con la renovación bienal de la cámara de diputados, los electores expresarán el nombre de los candidatos que han de ocuparlas.

Art. 8.º (Ex-inciso 1.º del artículo 55). La convocatoria expresará el número de diputados ó electores de cada distrito, el nombre de los que cesan en su mandato, y de los que se elegirán para llenar vacantes.

Art. 9.º (Ex-inciso 3.º del artículo 55). La convocatoria será publicada y circulada inmediatamente en cada distrito ya sea en los diarios ó periódicos, ya en carteles ú hojas sueltas que se fijarán en los parajes públicos.

Art. 10. (Ex-inciso 2.º del artículo 73). Cada elector votará por el número de diputados ó electores que corresponden al distrito, expresando por quienes vota para llenar las vacantes.

Julio 5 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

10.ª sesión ordinaria

Art. 11. (Ex-inciso 2.º del art. 82) No procederá á abrir los pliegos que le serán entregados por el presidente de la legislatura ó del senado ó de la cámara de diputados, en su caso, sino cuando se hallasen reunidas las actas correspondientes á las dos terceras partes de las mesas del distrito electoral.

Art. 12. (Ex-inciso 3.º del art. 82) Contará los votos que haya obtenido cada candidato y expedirá á los electos por mayor número los diplomas correspondientes.

Art. 13. (Ex-art. 104) Serán penados con prisión de un año ó diez y ocho meses los que cometiesen los hechos siguientes: 1.º, 2.º y 3.º de la ley.

Art. 14. (Ex-inciso 3.º del art. 108) Los empleados civiles, militares ó policiales que por causa de su intervención dejasen sin efecto las disposiciones de los funcionarios electorales y los que teniendo á su órdenes fuerza armada hicieren reuniones para influir en las elecciones.

Art. 15. (Ex-inciso 6.º del art. 108) Todos los funcionarios que esta ley crea, cuando su inasistencia ó el abandono de su cargo ó sus instigaciones impidieran la realización de los actos que incumben á la junta ó á la mesa á que pertenecen.

Art. 16. (Ex-inciso 1.º del art. 110) Las autoridades civiles, militares ó eclesiásticas que recomienden á sus empleados ó á los electores que hayan recibido los servicios de su repartición dar su voto por determinado candidato ó abstenerse de votar sea que la recomendación se haga verbalmente ó por escrito.

Art. 17. (Ex-art. 113) Todos los juicios motivados por esta ley y que no tengan designado por ella misma un juez ó tribunal competente, serán sustanciados ante los juzgados federales.

A. Lucero.

Julio 4 de 1904.

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de diputados, etc.*

## TÍTULO I

## De la calidad, derechos y deberes del elector

## I

## DE LOS ELECTORES

Artículo 1.º Para ser elector se requiere: Ser argentino ó ciudadano naturalizado, tener diez y ocho (18) años de edad y hallarse inscripto en el registro cívico nacional.

Art. 2.º No podrán inscribirse como electores:

1.º Los dementes.

2.º Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito.

3.º Los eclesiásticos regulares.

4.º Los que se hallen asilados en hospicios públicos ó estén habitualmente á cargo de congregaciones de caridad

5.º Los soldados, cabos y sargentos de la tropa de línea y gendarmes de policía.

6.º Los condenados á pena de presidio ó penitenciaria.

7.º Los reincidentes y los condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la condena.

8.º Los penados por falso testimonio, ó por delitos electorales, durante cinco años después de la condena.

9.º Los que hubiesen sido declarados incapaces de desempeñar funciones políticas.

10. Los quebrados fraudulentos, hasta su rehabilitación.

11. Los que hubiesen sido privados de la tutela ó curatela por defraudación de los bienes del menor ó del incapaz, mientras no restituyan lo adeudado.

12. Todos aquellos no comprendidos en los incisos anteriores que se hallen bajo la vigencia de una pena temporal, hasta que ésta sea cumplida.

13. Los que hubiesen eludido las leyes sobre servicio militar, hasta que hayan cumplido cuarenta y cinco años de edad.

14. Los que hubiesen sido excluidos del ejército con pena de degradación, hasta diez años después de la condena.

15. Los deudores por defraudación ó malversación de caudales públicos, mientras no satisfagan su deuda.

## II

## DERECHOS DEL ELECTOR

Art. 3.º Ninguna autoridad podrá reducir á prisión al ciudadano elector durante las horas de la elección, salvo el caso de flagrante delito, ó cuando existiera orden emanada de autoridad competente, ni podrá estorbarsele el tránsito de su domicilio al lugar de la elección.

Art. 4.º A objeto de asegurar la libertad, seguridad é inmunidad individual ó colectiva de los electores, el juez nacional en las capitales ó ciudades donde ejerza sus funciones, y los jueces letrados ó de paz, respectivamente, de cada sección ó lugar de comicio, mantendrán abiertas sus oficinas durante las horas de la elección, para recibir y resolver verbal é inmediatamente, las reclamaciones de los electores que se viesen amenazados ó privados del ejercicio del voto.

A este efecto, el elector por sí, ú otro ciudadano en su nombre, por escrito ó verbalmente, podrá denunciar el hecho ante el juez respectivo, y las resoluciones de este funcionario se cumplirán sin más trámite, por medio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Art. 5.º El derecho de sufragio es individual, y ninguna autoridad, persona, corporación, partido ó agrupación política, puede obligar al elector á votar en grupos de cualquier denominación que fuesen.

Art. 6.º Las garantías prescriptas en las disposiciones anteriores á favor de los electores, son extensivas á los ciudadanos que por esta ley deben intervenir en la recepción del voto.

### III

#### DEBERES DEL ELECTOR

Art. 7.º La calidad del elector se comprobará en todo tiempo, por la *Partida cívica*, que se extenderá por las oficinas del registro civil en una libreta con varias fojas en blanco, que contendrá las especificaciones determinadas por el artículo 15 y que podrá ser renovada con todas las anotaciones que contenga, cada vez que su deterioro ó extravío lo haga necesario.

Art. 8.º No se podrá desempeñar en la República cargo ó empleo público, profesional ó nó, para el que se requiere el ejercicio de la ciudadanía, sin acreditar la calidad de ciudadano con la exhibición de la *partida cívica*.

Los ciudadanos que desempeñan actualmente dichos cargos, deberán proveerse de la *partida cívica*, bajo pena de la pérdida del empleo salvo los habitantes de los territorios nacionales y los que se hallasen ausentes del país, que deberán llenar este requisito en el lugar de su domicilio á los treinta días de su regreso.

La no inscripción en el registro cívico no exceptúa del desempeño de aquellos cargos públicos cuya aceptación es obligatoria por reputarse inherentes á la condición de ciudadano.

Art. 9.º Las funciones electorales que esta ley atribuye, se consideran cargas públicas, y son irrenunciables, salvo caso de enfermedad ó ausencia de la respectiva sección electoral justificada ante la *junta electoral* del distrito.

## TÍTULO II

### Del Registro cívico nacional

#### I

#### DIVISIONES TERRITORIALES Y FORMACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE DISTRITO

Art. 10. A los fines de esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la constitución nacional, la capital federal y cada una de las provincias formará un distrito electoral. Cada parroquia en la capital federal y cada departamento ó partido en las provincias formará una sección electoral.

Art. 11. En la capital de la república y en cada provincia se formará una *junta* que se denominará *junta electoral de distrito* y será compuesta del juez federal (donde hubiere más de uno el más antiguo, y en su defecto el de mayor edad, del presidente del superior tribunal de justicia (en la capital federal, el presidente de la cámara de apelaciones en lo civil), y del funcionario llamado á presidir la asamblea legislativa, con exclusión de los vice gobernadores de provincia, y en la capital el presidente del consejo ó comisión municipal.

Son reemplazantes del juez federal, donde hubiese varios, uno de los otros, por orden de antigüedad, y á falta de éstos, donde no hubiere más que uno, su reemplazante legal.

Son reemplazantes del presidente del tribunal superior en las provincias, el vocal más antiguo del mismo ó el de mayor edad, si hay varios de igual antigüedad, y en la capital el presidente de la cámara de apelaciones en lo criminal y comercial, y en su defecto, el vocal más antiguo de ambas cámaras, como en el caso anterior.

Serán reemplazantes del presidente de la legislatura y del presidente del consejo municipal, los substitutos respectivos, según las constituciones ó leyes orgánicas correspondientes.

Actuará como presidente de la *junta electoral de distrito*, el juez federal, y como secretario, que autorizará sus actos, el secretario del mismo; en defecto de éste el del superior tribunal, y en su reemplazo, un abogado ó escribano designado por la misma *junta*.

Art. 12. La *junta electoral de distrito* sólo podrá ejercer las funciones que le confiere la presente ley reunida con la totalidad de sus miembros en el local de la cámara de diputados en la capital federal y en el del juzgado federal en las provincias.

### II

#### DE LA FORMACIÓN Y CONTINUACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO

Art. 13. Mientras no se practique un nuevo censo, declárase definitivo el padrón electoral levantado en 1903, con las ampliaciones que se hagan hasta la sanción de la presente ley, y se consideran oficinas del registro cívico nacional las encargadas de llevar el registro del estado civil de las personas en las parroquias de la capital federal y en cada capital de provincia ó cabecera de departamento ó partido, las que serán provistas por el ministerio del interior de todos los libros y formularios impresos que sean necesarios, por intermedio del intendente municipal en la capital federal y de los gobernadores en las provincias.

Art. 14. El registro cívico es permanente y todo ciudadano no inscripto anteriormente y los que hayan cumplido diez y ocho años de edad, tienen el derecho de solicitar su ins-

cripción dentro de los términos especificados por esta ley, siempre que no estén comprendidos en ninguna de las incapacidades que la misma establece.

Art. 15. Presentado un ciudadano á solicitar su inscripción, deberá manifestar al jefe del registro civil su edad, estado, profesión y domicilio, si es ciudadano nativo ó naturalizado, y si sabe leer y escribir.

La edad, en los casos de duda, se justificará por la partida de nacimiento ó la información judicial correspondiente. Los ciudadanos naturalizados deberán presentar necesariamente la carta de ciudadanía. El domicilio podrá justificarse por medio de dos testigos. Los documentos que como prueba necesite presentar el interesado, le serán otorgados gratis y cualquiera actuación se hará en papel simple.

Llenados estos requisitos, el jefe del registro civil publicará la nómina de los solicitantes de inscripción, durante quince días consecutivos, en carteles que colocará en su oficina, en paraje visible y de fácil acceso al público. Si pasado ese término no se presentase tacha alguna relativa á los solicitantes, incluirá sus nombres en la serie del registro de la respectiva sección electoral que corresponda á su domicilio, aunque pase del número de 200 electores, y le otorgará la partida cívica determinada por el artículo 7. Si se dedujese reclamación por inscripción indebida, se procederá como se establece en el artículo veintiocho.

Si el jefe del registro hubiese negado la inscripción al solicitante al presentarse, lo hará constar así por escrito, expresando los fundamentos de su negativa; con este documento el interesado podrá ocurrir ante el juez federal que actúa como miembro de la junta electoral deduciendo las acciones del caso por falta de inscripción.

Art. 16. El jefe del registro civil de cada sección electoral eliminará del registro cívico á los ciudadanos inscriptos que hayan fallecido, siempre que tenga constancia del hecho por la partida de defunción, como asimismo á los que hubieran sido privados de sus derechos electorales por sentencia de juez competente y á los que por cambiar de domicilio hubieren sido inscriptos en el registro de otra sección electoral.

Art. 17. Los jefes de registro civil de cada sección electoral comunicarán mensualmente á la junta electoral del distrito la nómina de los ciudadanos inscriptos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quince y de los ciudadanos eliminados del registro, á los fines de lo dispuesto en el último caso previsto en el artículo anterior, y también para que se hagan las anotaciones en el registro general del distrito electoral.

Art. 18. Cada dos años, tres meses antes de la fecha fijada para que tenga lugar la elección de diputados al honorable congreso, las juntas electorales de distrito mandaràn publicar en carteles impresos ó manuscritos en las oficinas de registro civil de cada sección electoral el registro cívico correspondiente, orde-

nando las series determinadas por esta ley con la inclusión de los nuevos inscriptos y la eliminación de los fallecidos y de los que hubieren sido privados de sus derechos electorales - y dispondrán que se saquen tres copias para ser remitidas á la cámara de diputados de la nación y á la de senadores cuando se trate de elecciones de esta clase en la capital y de electores de presidente y vicepresidente de la república; la segunda será conservada por la junta electoral del distrito respectivo, y la tercera se distribuirá por secciones remitiendo la copia de cada sección electoral á la oficina de registro civil, considerada oficina permanente del registro cívico nacional.

Art. 19. Las elecciones parciales que deban tener lugar se harán por el registro cívico que hubieren ordenado las juntas electorales de distrito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 20. La continuación del registro cívico se suspenderá tres meses antes de cada elección general y un mes antes de cada elección parcial.

## TÍTULO III

### I

#### DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO

Art. 21. El registro cívico se renovará totalmente cada vez que se determine por el gobierno de la nación el levantamiento de un censo general de la población, sin perjuicio del derecho de cada ciudadano para pedir en cualquier tiempo su inscripción y del que tiene todo elector para solicitar la eliminación de los que hubieran sido indebidamente inscriptos.

Art. 22. La comisión central ó director del censo en la capital federal, y las comisiones ó comisarios del censo en las provincias, entregarán á la junta electoral del respectivo distrito electoral, el censo de los ciudadanos naturales y naturalizados de diez y ocho ó más años de edad, con las siguientes especificaciones correspondientes á cada uno: nombre, edad, estado, domicilio, profesión ú oficio y si sabe leer y escribir.

Art. 23. El censo deberá entregarse dividido por parroquias, en la capital federal y por departamentos ó partidos, y distritos ó cuarteles en las provincias.

Art. 24. Los funcionarios que nombre el poder ejecutivo, para el levantamiento del censo nacional de la población serán responsables de toda falta ó delito que cometiesen para adular el resultado del censo, quedando comprendidos entre los que determina el inciso 5 del artículo 95

Art. 25. Recibido el censo por la junta electoral de distrito, ésta mandará entregar el que corresponde á cada sección electoral al jefe del registro civil de la misma á fin

de que lo publique por carteles por el término de treinta días en la forma determinada por el artículo 15.

Art. 25. Durante este término se recibirán reclamaciones por falta de inscripción ó por inscripción indebida que se deducirán por escrito ante el mismo jefe del registro civil de la sección electoral á que el reclamante ó el tachado pertenezca.

Art. 27. Los jefes de registro civil elevarán á la junta de distrito cada reclamación, informada separadamente para que la junta dé su fallo en conciencia, dentro de cinco días fundándolo en el informe del jefe del registro civil.

Art. 28. De las resoluciones de la junta podrá apelarse ante el juez federal, quien podrá abrir á prueba el juicio de tachas. El fallo del juez es inapelable y será comunicado á la junta electoral del distrito á sus efectos.

Art. 29. En el juicio especial de tachas el juez federal procederá breve y sumariamente, habilitando días y horas si fuese necesario. Todos los procedimientos serán gratuitos y en papel simple.

Art. 30. Resueltas las tachas presentadas y rectificadas las listas del empadronamiento, la junta electoral del distrito formará el registro cívico de cada sección electoral y dispondrá que se saquen tres copias, á los fines de lo dispuesto por el artículo diez y ocho (18), dividiendo los nombres de los ciudadanos inscriptos en series numeradas de doscientos (200) electores, siguiendo el orden de los cuarteles y distritos ó otras subdivisiones administrativas y el que los electores tengan en las listas del empadronamiento.

Art. 31. El registro cívico, así formado, será publicado en carteles, manuscritos ó impresos, en cada sección electoral y en todo tiempo la junta electoral del distrito y los jefes del registro civil permitirán sacar copias, del todo ó parte del registro cívico correspondiente al distrito electoral ó á cualquiera de sus secciones.

## II

### ENTREGA DE LAS LIBRETAS CÍVICAS

Art. 32. Los jefes del registro civil son las autoridades á quienes esta ley atribuye el deber de otorgar la partida cívica de que habla el artículo siete.

Art. 33. Cuando el jefe del registro civil haya recibido de la junta los padrones electorales depurados, llenará y entregará á domicilio las partidas cívicas, que serán distribuidas por el correo, usando el sistema de expreso, donde estuviere establecido, ó el de carta certificada con recibo de retorno. Donde no hubiese ese sistema de correo, la policía estará encargada de la distribución, requiriéndose recibo del funcionario á quien se entreguen las partidas para ser distribuidas, el cual á su vez, lo requerirá de cada una de las personas á quienes fueren dirigidas.

## TÍTULO IV

### De las asambleas electorales

#### I

#### DISPOSICIONES PRELIMINARES

#### *Convocatorias, constitución de las mesas*

Art. 34. Las elecciones de electores de senadores por la capital y de diputados al congreso para la renovación constitucional de ambas cámaras, tendrá lugar el segundo domingo de marzo, y las elecciones extraordinarias para llenar vacantes que ocurran dentro de los períodos ordinarios, se efectuarán en el día festivo que designe la convocatoria.

Art. 35. En cada distrito electoral la convocatoria á elecciones de diputados de la nación, de electores de presidente y vice presidente y de senadores por la capital, será hecha por el poder ejecutivo de la respectiva provincia, ó por el de la nación en su caso.

La convocatoria de electores de presidente y vice presidente será hecha tres meses antes, y la de diputados y senadores dos meses antes del día señalado para la elección.

Art. 36. La convocatoria deberá expresar en todos los casos el número de diputados ó electores á elegirse en cada distrito.

Art. 37. Cuando no hubiese podido realizarse la elección en el día designado ó hubiese sido anulada, ella sólo podrá tener lugar previa convocatoria, que se hará inmediatamente por un mes y con los mismos conjueces.

Art. 38. Las convocatorias serán publicadas y circuladas inmediatamente en cada distrito por el poder ejecutivo nacional y gobernadores de provincia.

Art. 39. Desde el primer día de la publicación de las convocatorias, las juntas electorales de distrito designarán con número de orden y por sorteo entre todos los inscriptos de cada serie que sepan leer y escribir, cinco ciudadanos como titulares y cinco como suplentes, para formar las mesas receptoras de votos de cada serie, cuyas nóminas serán publicadas inmediatamente.

Si en una serie no hubiese diez electores que sepan leer y escribir, se hará el sorteo entre los inscriptos en las series siguientes.

Los escrutadores así designados, votarán ante la mesa en que funcionen, lo que se hará constar en el acta.

Cada serie de doscientos electores ó fracción mayor de cien sufragará en una sola mesa, y las fracciones menores votarán en la última serie.

Art. 40. Desde la publicación de la nómina de escrutadores hasta el (20) veinte de febrero, toda persona hábil para elegir, según las cualidades exigidas por esta ley, puede presentarse ante la respectiva junta, por escrito y en papel simple, á observar la lista, á

Número de la inscripción	Nombre del elector	Observaciones



El número de registro ó padrón, y el nombre del elector estarán impresos ó manuscritos:

Terminada la lista de electores continuará la fórmula impresa en los siguientes términos:

Siendo las cuatro de la tarde, el presidente declaró terminado el acto electoral, y no haciéndose observación por los señores escrutadores á ese respecto, se procedió á pasar raya á las líneas correspondientes á los electores que no han votado, resultando que lo han hecho (el número)..... ciudadanos.

Con lo que terminó el acto, firmando el presidente, los escrutadores y testigos presentes.

Art. 53. Después de admitidos los fiscales se procederá acto continuo á recibir el voto de los escrutadores titulares, de los suplentes y de los fiscales presentes, y retirándose los suplentes que no deben formar parte de la mesa en ese carácter, se dará comienzo al acto público del sufragio.

Art. 54. Durante la elección se observarán las reglas siguientes:

- 1.ª Cada elector presentará al presidente de la mesa su partida cívica, y una boleta en papel blanco, impresa ó manuscrita que exprese el nombre de las personas por quienes vote.
- 2.ª El presidente depositará las boletas en la urna que al efecto estará colocada sobre la mesa; y pondrá en la partida cívica la anotación *votó* y la fecha por medio de un sello que le será entregado el día de la elección por el jefe del registro civil de la sección electoral.
- 3.ª En el acto de la elección no se admitirá de persona alguna, discusión ni observación sobre hechos extraños á él, y respecto del elector, sólo podrán admitirse los que se refieran á su identidad.

Estas objeciones se limitarán á exponer netamente el caso, que resolverá acto continuo por mayoría, por la admisión ó rechazo del elector. En la misma forma resolverá la mesa toda dificultad á fin de no suspender la elección.

- 4.ª Las mesas podrán ordenar el arresto de los que cometan alguna ilegalidad ó engaño, poniéndolos inmediatamente á disposición de la autoridad competente y hacer retirar á los que no guarden el comportamiento y la moderación debida.

Art. 55. Al comenzar la votación, las urnas se cerrarán después de verificar que se hallan completamente vacías, y se entregará una llave al presidente de la mesa y otra á uno de los escrutadores designado por la mayoría, consignándose en el acta en quienes queda depositada.

Art. 56. El ministerio del interior y el poder ejecutivo de cada provincia hará cons-

truir bajo un solo modelo y distribuirá las urnas necesarias á las secciones electorales.

Cada urna tendrá dos llaves de distintas cerraduras y una abertura en la parte superior, por donde pueda fácilmente introducirse una boleta.

Art. 57. Las elecciones no podrán ser interrumpidas, y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresará en el acta el tiempo que haya durado la interrupción. Terminará irremisiblemente á las cuatro en punto de la tarde.

#### IV

##### DEL ESCRUTINIO

Art. 58. A las cuatro de la tarde, hayan ó no votado todos los electores, el presidente de la mesa declarará terminada la elección. Si no hubiese reclamación sobre la exactitud de la hora, ó salvada por mayoría la que se hiciere, se procederá á pasar raya en la línea de las listas correspondientes á los electores que no hayan votado; se consignará el número de sufragantes y se firmarán las actas.

Después de extendida el acta precedente, se procederá, acto continuo y en el mismo local, á abrir la urna, revisar las boletas de sufragio haciéndose públicamente el escrutinio y proclamación de los electos, y á extender á continuación del acta anterior, otra en que se exprese en letras el resumen general de la votación, empezando por los candidatos que hubiesen obtenido mayor número de sufragios.

Esta acta será firmada del mismo modo que la precedente.

El presidente de la mesa dará á cada fiscal ó elector que lo solicite, un certificado firmado del resultado de la elección.

Art. 59. Redactadas las actas en dos ejemplares se remitirán uno al presidente de la junta electoral del distrito y otro al juez nacional de sección, para ser remitido sellado y certificado, al presidente de la cámara de diputados de la nación, ó al del senado, en caso de elecciones de electores para senadores de la capital ó para presidente y vice presidente de la república.

Art. 60. Estas actas deben contener, además de lo previsto en el artículo anterior:

- 1.º Las protestas que se formularen en el acto del comicio, las cuales deberán expresar los nombres de los electores excluidos ó incluidos indebidamente.
- 2.º La hora en que termine el acto, el nombre del empleado ó agente de policía que conduzca el acta, y demás circunstancias que la mesa creyese conveniente consignar en resguardo de la ley, siempre en forma brevisima.
- 3.º Las firmas de los presidentes de las mesas, escrutadores, fiscales, empleados de policía y demás concurrentes que desearan firmar, siempre que hubiere lugar y tiempo para ello.

Art. 61. La remisión de las actas en las ciudades donde residan los funcionarios á quienes deben ser entregadas, se hará por intermedio de empleados de policía bajo la responsabilidad penal que corresponde á los substractores de documentos públicos de la nación; y en los demás pueblos ó lugares, por medio del correo, en sobres sellados, lacrados y certificados ó por agentes de las policías locales ó mensajeros, quienes durante su viaje no podrán ser detenidos ni arrestados hasta que lleguen á su destino.

Art. 62. Los funcionarios á que se refiere el artículo cincuenta y nueve (59) darán recibo de las actas, expresando el día y hora de la entrega y la forma en que se haya efectuado.

Se presumirán fraudulentas las actas que no se entreguen en seguida, en el tiempo razonablemente necesario para llevarlas desde el comicio á las oficinas, á menos que se pruebe impedimento ó causas suficientes que justifiquen la demora.

Art. 63. Un mes después de practicada una elección de diputados ó electores de presidente y vicepresidente, ó de senador por la capital, y quince días en caso de elecciones parciales por vacantes, se reunirán las juntas electorales de distrito, al sólo objeto de practicar el escrutinio general de las mismas y designar los diputados ó electores que resultasen con mayoría de sufragios.

Art. 64. La junta observará para este caso las siguientes prescripciones:

- 1.ª Ella no podrá pronunciarse sobre la validez ó nulidad de las elecciones, ni rechazar las actas que revistan las formas determinadas por esta ley.
- 2.ª No procederá á abrir los pliegos sino cuando se hallasen reunidas las actas correspondientes á las dos terceras partes de las mesas de cada distrito electoral ó provincia.
- 3.ª Abiertos los pliegos, se hará inmediatamente por la junta el escrutinio general, terminándolo y proclamando en la misma sesión los diputados ó electores que resulten electos.
- 4.ª La junta recibirá toda protesta que se le presente para ser elevada á la cámara de diputados ó de senadores, según el caso, con expresión de su juicio sobre el mérito de ellas, si así lo estimase conveniente.
- 5.ª El resultado del escrutinio y la proclamación se harán constar en una acta que se firmará por los miembros de la junta y el secretario respectivo será comunicado á la cámara de diputados ó al congreso, según el caso, y á los electos para que les sirva de diploma.
- 6.ª Verificado el escrutinio y firmadas las actas, la junta colocará nuevamente en paquete sellado y lacrado, los antecedentes de la elección, y los remitirá, junto con el acta, á la cámara de diputados ó al congreso, como en el inciso anterior.

## TÍTULO V

### De las elecciones parlamentarias y presidenciales

#### I

##### DE LOS SENADORES POR LAS PROVINCIAS

Art. 65. El senado de la nación comunicará al poder ejecutivo las vacantes ocurridas cada tres años, con arreglo al artículo (48) cuarenta y ocho de la constitución, ó las vacantes parciales de que habla el artículo (54) cincuenta y cuatro de la misma.

Art. 66. Cuando se trate de la renovación ordinaria del senado nacional, las cámaras legislativas, por citación especial, deberán reunirse y nombrar senador, por lo menos dos meses antes, y no más de seis, del día fijado para la reunión preparatoria del senado.

En caso de demora de la legislatura, el senado, por medio del poder ejecutivo, podrá requerirla á fin de que verifique la elección.

Art. 67. Cuando vacase algún puesto de senador por muerte, renuncia ú otra causa, el gobierno de la provincia á que corresponda la vacante, hará proceder inmediatamente, á la elección de un nuevo miembro.

Art. 68. Las actas de las elecciones se comunicarán á los elegidos por conducto del poder ejecutivo, para que les sirva de diploma, y al senado para su conocimiento.

Art. 69. Los senadores electos que renuncien su nombramiento antes de ser aprobado, lo comunicarán á la legislatura, á fin de que se proceda inmediatamente á la elección del reemplazante.

#### II

##### DE LOS SENADORES POR LA CAPITAL

Art. 70. Los electores designados por el distrito de la capital, para elegir senadores según el procedimiento de los artículos sesenta y tres (63) y sesenta y cuatro (64), se reunirán en el local del senado, antes del (15) quince de abril, cuando sean elecciones ordinarias, ó diez días después de verificadas las extraordinarias, en *quorum* de la mitad más uno de sus miembros, harán el nombramiento del presidente y secretario del cuerpo, y procederán á elegir senadores por boletines firmados que entregarán al presidente y que éste leerá en voz alta. La designación de senador ó senadores, expresando á quien reemplazan, se hará por mayoría absoluta de votos de los electores presentes, y si ninguno de los candidatos la tuviese, se circunscribirá la nueva votación á los que hayan tenido mayor número de votos, decidiendo el presidente, en caso de empate, quien tendrá entonces voto doble.

Art. 71. Esta elección tendrá lugar en una sola sesión, y proclamados por el presidente

del cuerpo electoral el senador ó senadores nombrados, y el período de sus respectivas funciones, se labrarán dos ejemplares del acta que firmados por el presidente y el secretario, serán comunicados directamente al senado y al electo ó electos, para que les sirvan de suficiente diploma.

Art. 72. Si el senado desechase el nombramiento de senador ó senadores por vicios en la composición del colegio electoral, se comunicará inmediatamente al poder ejecutivo, á fin de que convoque al pueblo á nueva elección de electores, pero si el nombramiento fuera anulado por no reunir el electo ó electos las condiciones constitucionales y legales requeridas para ser senador, se comunicará al poder ejecutivo para que convoque al colegio á verificar nueva elección, la que deberá practicarse dentro de los diez días subsiguientes al aviso.

Art. 73. Los electores calificados terminarán en su mandato cuando haya sido aprobada por el senado la elección de senador, y si esto no sucediere, lo conservarán durante el período del congreso en que hubiesen verificado la elección, á efecto de proceder á una nueva, si aquélla fuese anulada, ó conocer de las renunciaciones ó excusaciones á que se refiere el artículo siguiente.

Art. 74. Las renunciaciones y excusaciones de los senadores electos, antes de aprobada su elección, serán presentadas al colegio de electores, los que resolverán sobre la aceptación, procediendo en ese caso á nuevo nombramiento dentro de los diez días siguientes.

Art. 75. El cargo de elector no puede ser renunciado. La excusación inmotivada, así como la falta de asistencia al acto electoral, serán penadas con arreglo á esta ley.

### III

#### ELECCIÓN DE DIPUTADOS

Art. 76. Cada dos años, el segundo domingo de marzo se abrirán en toda la república las asambleas electorales para hacer la elección de los diputados nacionales que deben renovarse con arreglo al artículo 37 de la constitución nacional.

Art. 77. Toda vez que por muerte, renuncia ó deposición de un diputado nacional, hubiera de hacerse elecciones para reemplazarlo dentro de los períodos que fija el artículo anterior, el poder ejecutivo de la provincia á que pertenezca el diputado que haya de elegirse, hará proceder á la elección convocando al efecto con treinta días al menos de anticipación las asambleas electorales, que se reunirán en el día designado y procederán en todo con sujeción á las anteriores disposiciones de esta ley.

Art. 78. Todo diputado electo que no quiera incorporarse á la cámara, dará aviso á la misma durante el período de sesiones preparatorias á fin de que ella comunique la va-

cante al poder ejecutivo. La convocatoria á nueva elección deberá hacerse dentro de los diez días siguientes al aviso de la cámara.

### IV

#### ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Art. 79. Seis meses antes de que concluya el período de la presidencia y vicepresidencia, se abrirán en toda la república las asambleas electorales de conformidad al artículo 81 de la constitución.

Art. 80. El escrutinio de esta elección, la proclamación y expedición de diplomas á los electores, se verificará conforme á lo prevenido en el título IV, párrafo IV, respecto á las elecciones de los diputados nacionales.

Art. 81. Si hubiese duda acerca del resultado legal de la elección, por mediar protestas sobre la validez de las elecciones parciales ó de algunos votos, la junta declarará también al mismo tiempo quienes resultarían electores caso de ser procedentes las enunciadas protestas.

Art. 82. Reunidos los electores en cualquier número en la capital federal y en las de sus respectivas provincias, cuatro meses antes de que concluya el término del presidente cesante, después de verificar el canje de sus respectivos poderes y hacer el nombramiento de presidente y secretario del cuerpo, procederán á elegir presidente y vicepresidente de la república en la forma prescripta por el artículo 81 de la constitución. La reunión de la junta se hará en el recinto de la legislatura á las dos de la tarde.

Art. 83. En el caso previsto por el artículo 81, los ciudadanos que, conforme á las declaraciones de la junta, se consideren electores legales, podrán reunirse también en el recinto de la legislatura y votar para presidente y vicepresidente de la república, inmediatamente después que lo hubieren verificado aquellos á quienes se hubiesen pasado los diplomas, debiendo observar la forma establecida en el artículo anterior.

Art. 84. El presidente del senado convocará á la asamblea de ambas cámaras para cualquier día del mes siguiente al de la elección hecha por los electores, á los fines de lo dispuesto por los artículos 82, 83, 84 y 85 de la constitución.

Art. 85. Si el congreso al rectificar el escrutinio de cualquiera provincia, encontrara que no ha sido legalmente hecho, y que los electos son otros que aquellos á quienes se hubiesen entregado los diplomas, deberá incluir el voto de éstos, y no el de aquéllos en el cómputo general, siempre que los hubiesen dado en oportunidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.

Art. 86. Los miembros del congreso que sin causa justificada faltaren á la sesión de que habla el artículo 84, incurrirán en la multa de quinientos pesos.

## TÍTULO V

## Prohibiciones y penas

## I

## DISPOSICIONES PROHIBITIVAS

Art. 87. Queda prohibida la aglomeración de tropas ó cualquier ostentación de fuerza armada en el día de la recepción del sufragio.

Las fuerzas nacionales y provinciales, con excepción de las de policía destinadas á guardar el orden que se encontrasen en la localidad durante el día de la elección, se conservarán acuarteladas.

Art. 88. Queda prohibido á los jefes y oficiales del ejército de línea y comandantes de la guardia nacional, permanecer en el recinto de las asambleas electorales más tiempo que el necesario para sufragar, como asimismo encabezar grupos de ciudadanos durante la elección, y hacer valer en cualquier momento la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio.

Art. 89. Queda prohibido al propietario que habite una casa situada en un radio de una cuadra alrededor de una mesa escrutadora, ó á su inquilino, admitir reunión de electores, ni depósitos de armas durante las horas de elección. Si la casa fuese tomada á viva fuerza, deberá el propietario ó inquilino dar aviso inmediato á la autoridad policial para su desalojo.

Art. 90. Durante el día del comicio, hasta pasada una hora de la clausura del mismo, no será permitido tener abiertas las casas destinadas al expendio de bebidas alcohólicas.

Art. 91. Será prohibido á los electores el uso de banderas, divisas ú otros distintivos, durante el día de la elección.

## II

## DISPOSICIONES PENALES

Art. 92. Comete violación del derecho electoral toda persona particular ó funcionario público que por hechos ú omisiones, y de modo directo ó indirecto, impida ó contribuya á impedir que las operaciones electorales se realicen con arreglo á la constitución, á la presente ley y al libre ejercicio del sufragio.

Art. 93. Será culpable del delito previsto y penado por el artículo veintiocho de la ley núm. 4189 que reforma el código penal, todo inscriptor ó escrutador, ó persona que intervenga en la formación del registro cívico ó en los registros electorales, que en cualquier forma falsifique, adultere, destruya, substraija ó modifique antes, durante ó después de la inscripción ó de la elección, los registros, actas ó documentos electorales. Las personas

que sin ejercer cargo legal cooperen, concurren ó faciliten la falsificación, adulteración, destrucción, substracción ó modificación de dichos documentos, sufrirán la pena establecida en el segundo párrafo del artículo citado. El juicio sobre estos delitos será absolutamente independiente de la aprobación ó desaprobación del acto electoral por las cámaras del congreso.

Art. 94. Serán penados con arresto de dos á seis meses, los que cometiesen los hechos siguientes:

- 1.º Proponer ó efectuar la compra ó venta de votos.
- 2.º Votar en más de una mesa, ó votar con nombre supuesto;
- 3.º Suministrar datos falsos para hacerse inscribir ó inscribirse nuevamente por cambio de domicilio sin dar aviso de su anterior inscripción;
- 4.º Los que impidan al elector el libre uso de su derecho de sufragio;
- 5.º Los que hiciesen uso de banderas, divisas ú otros distintivos, durante el día de la elección;
- 6.º Los que con dicterios, amenazas, injurias ó cualquier otro género de demostraciones violentas, intentasen coartar la voluntad del sufragante;
- 7.º Los dueños ó inquilinos principales de las casas á que se refiere el artículo ochenta y nueve (89) si no diesen aviso á la autoridad al conocer el hecho; los que se apoderen de ellas para los fines del mismo artículo; y los de aquellas en que se expendan bebidas, si burlasen la prohibición del artículo 90;
- 8.º Los que detuviesen, demorasen ó estorbasen por cualquier medio á los correos, mensajeros ó agentes encargados de la conducción de pliegos de cualquiera de las autoridades encargadas de la ejecución de esta ley.

Art. 95. Serán igualmente penados con arresto de seis meses á un año, los particulares y funcionarios públicos que realicen los hechos siguientes ó que, en violación de esta ley, contribuyan á uno de los actos ó de las omisiones que también se determinan:

- 1.º El secuestro de un elector de senadores ó de presidente ó vicepresidente de la república y el de los demás funcionarios á quienes esta ley encomienda los actos preparatorios y ejecutivos de las elecciones, privándoles del ejercicio de sus funciones;
- 2.º Promoción de desórdenes ó disputas que den por resultado suspender la votación por más de quince minutos, ó impedirla por completo;
- 3.º A que las listas, registros y anotaciones no sean formadas con exactitud ó no permanezcan expuestas al público por el tiempo y en los parajes prescritos;
- 4.º A todo cambio de días, horas ó luga-

res preestablecidos para las distintas formalidades de la ley;

- 5.º A toda práctica fraudulenta en las operaciones de formación de los registros, listas y demás documentos y actas, y en la constitución de comisiones, juntas ó mesas de inscripción, tachas, votos ó escrutinio;
- 6.º A que las actas, fórmulas ó informes de cualquier clase que la ley prevé, no sean redactados en su forma legal, o firmados ó trasmitidos en tiempo oportuno, ó por las personas que deban suscribirlos;
- 7.º Proclamar un falso resultado de una votación.

Art. 96. Se hallan en la misma categoría del artículo anterior, y sujetos á igual penalidad, los autores y cómplices de los siguientes hechos:

- 1.º El que debiendo recibir ó conducir los registros y actas de una elección, y los que estando encargados de su conservación y custodia, quebrantasen los sellos ó rompiesen los sobres que los contengan;
- 2.º Los empleados civiles ó militares que interviniesen para dejar sin efecto las disposiciones de los funcionarios electorales, y los que teniendo á sus órdenes fuerza armada, hiciesen reuniones para influir en las elecciones;
- 3.º Los que, desempeñando alguna autoridad, privasen por cualquier otro medio ó recurso, de la libertad personal á un elector, impidiéndole inscribirse ó dar su voto; ó estorbando el tránsito de su domicilio al lugar de la elección;
- 4.º Los miembros del poder judicial, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios; los empleados ó funcionarios de policía y los empleados del registro civil, dependientes del gobierno de la nación y de las provincias, de cualquier jerarquía que sean, que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado durante las luchas, ó que en cualquier tiempo hagan actos de adhesión ostensible ó de oposición manifiesta con relación á los partidos políticos existentes ó en formación, salvo el derecho de emitir su voto.
- 5.º Los funcionarios públicos nacionales y provinciales que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ó oficina uno ó más empleados y los induzcan á adherir á candidatos ó partidos determinados.

Art. 97. Todas las faltas enumeradas y las penas establecidas en los artículos anteriores, se entenderán sin perjuicio de las que dispone el código penal, y las que correspondan por delitos comunes, conexos ó correlacionados con los hechos previstos y penados en es-

ta ley, y llevarán consigo como consecuencia inmediata:

- 1.º La privación temporaria del derecho de sufragio y pérdida del empleo cuando el culpable es funcionario público; si el funcionario fuera del poder judicial, de la policía, ó del registro civil, quedará además inhabilitado para el desempeño de todo puesto público por cinco años;
- 2.º En caso de reincidencia, la pena será la incapacidad absoluta por tiempo indeterminado para todos los funcionarios públicos; y la incapacidad absoluta, pero temporaria, para los particulares.

### III

#### DE LOS JUICIOS EN MATERIA ELECTORAL

Art. 98. Todos los juicios motivados por infracciones á la presente ley, que no tengan designado por ella misma un juez ó tribunal, serán substanciados ante los juzgados federales.

Art. 99. Todos los juicios que se substancien ante cualquier autoridad ó tribunal singular ó colegiado, por infracciones á la ley electoral, ó en sostenimiento, defensa ó garantía del derecho del sufragio y los que establecen los artículos 4, 26, 28, 29, 40 y 41 de esta ley, serán breves y sumarios y en papel simple; las partes deben concurrir al comparendo á que se las cite, provistas de toda la prueba que deban producir; no son admisibles en ellos cuestiones previas, pues todas deben ventilarse y quedar resueltas en un solo y mismo acto; sin embargo, en ningún caso se omitirá la citación y audiencia del acusado.

Art. 100. Todas las faltas y delitos electorales podrán ser acusados por cualquier ciudadano inscripto con tal que pertenezca al mismo distrito electoral, sin que el demandante esté obligado á dar fianza ni caución alguna, sin perjuicio de las acciones y derechos del acusado, si la acusación es maliciosa.

Podrán también ser acusados por los agentes fiscales, quienes intervendrán necesariamente en todos los juicios.

Art. 101. En los juicios que autoriza la presente ley, se observarán las reglas siguientes:

- 1.º Presentada la acusación, el tribunal citará á juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los tres días.
- 2.º Si resultare necesaria la prueba, se podrá fijar un término, como base, de tres días, durante los cuales deberán solicitarse todas las diligencias que deban producirse.
- 3.º Los jueces, á petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda la

remisión del documento que se denuncia como falsificado ó adulterado á los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento ó documentos pedidos, se citará inmediatamente á nueva audiencia en la cual se examinarán testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto á las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las veinte y cuatro horas siguientes del comparendo;

- 4.º El retardo de justicia en estos casos, será penado con multa de doscientos á quinientos pesos;
- 5.º El procedimiento en las causas electorales continuará aunque el querellante desista, y la sentencia que se diere producirá ejecutoria, aun cuando se dicte en rebeldía del acusado.
- 6.º Los jueces federales comunicarán á las juntas electorales de distrito todo fallo que haga cosa juzgada y que importe la privación de los derechos electorales ó la eliminación del registro, del nombre de los ciudadanos inscriptos.

Art. 102. Sin perjuicio de las reglas que sobre las apelaciones se especifican en esta ley, y en las de procedimientos ante los tribunales nacionales, habrá apelación de toda resolución, fallo ó sentencia en materia electoral, siempre que se imponga una multa de más de doscientos pesos y arresto de más de dos meses, en la forma siguiente:

- 1.º Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de las juntas electorales de distrito;
- 2.º Para ante las cámaras federales de apelación de los fallos de los jueces de sección.

Art. 103. Cuando no sea posible hacer efectivo el importe de una multa por falta de recursos del condenado, éste sufrirá arresto, en razón de cinco días por cada cincuenta pesos.

Art. 104. Las multas que por esta ley se establezcan, serán destinadas para el fomento de la educación común en los respectivos distritos.

Art. 105. Los gastos que demande la ejecución de esta ley, se harán de rentas generales con imputación á la misma.

Art. 106. Derógase la ley de elecciones nacionales vigente.

Art. 107. Comuníquese al poder ejecutivo.

CASTILLO.

Buenos Aires, mayo 2 de 1905.

*Al honorable Congreso de la nación.*

Tengo el honor de someter á vuestra ilustrada consideración el adjunto proyecto de ley de elecciones nacionales.

El parlamento y el país han tenido ocasión de asistir á la experiencia que se ha hecho de la ley vigente y creo interpretar sus anhelos proponiendo la reforma de puntos fundamentales, alguno de los cuales compromete, en mi concepto, principios constitucionales arraigados en el sentimiento nacional.

Las leyes políticas son más experimentales que científicas y por lo mismo deben ser comprensivas y prácticas.

He tenido ocasión de declarar que algunas de las innovaciones incorporadas á la ley actual representan verdaderos progresos para el mecanismo de nuestras instituciones; pero reputo indispensable corregir errores y salvar deficiencias é inconvenientes observados en su aplicación.

No se me oculta la disidencia que ha de provocar la reforma que proyecto; pero estoy decidido á sostenerla, porque tengo la convicción de que procuro medios eficientes para garantizar la libertad de sufragio, y porque en todo caso, aquella ha de ser la expresión de la voluntad popular que todos debemos pulsar con espíritu sereno, libre de prejuicios de doctrinas y de reatos partidarios.

Es indudable que la cuestión que ha de suscitar mayor controversia es la que se refiere al sistema del voto uninominal, fundado principalmente en la alta conveniencia política de dar representación á las minorías. No soy extraño á esta aspiración pública, que es común á todas las naciones más progresistas y cultas; pero será indispensable que nos detengamos ante prescripciones ineludibles de nuestra constitución que han hecho de la capital y de las provincias distritos electorales de un solo estado, á fin de que el pueblo respectivo elija directamente sus representantes á simple pluralidad de sufragios.

La constitución nacional como las de provincias hacen derivar de sus propias disposiciones todo el derecho electoral argentino, reservando para la ley solamente aquel conjunto de reglas necesarias para que prevalezca la libertad de sufragio y se haga efectivo el gobierno del pueblo, que es la ley suprema de las democracias.

Aunque aquellas prescripciones fueran discutibles, no veo el motivo fundado para romper con la tradición que han establecido las leyes anteriores, si el sistema del voto uninominal no ha de producir como resultado elecciones más libres. No desconozco la influencia de las leyes en las costumbres políticas—atribuyo á unas y otras la mayor importancia con relación á cualquier sistema electoral, pero séame permitido afirmar, con "la capacidad del pueblo para usar de sus derechos", la íntima convicción de que el ejercicio del sufragio no prevalecerá en la República mientras no se formen partidos orgánicos.

De este hecho ha de derivar necesariamente la prescindencia de los gobernantes en las luchas eleccionarias.

Por lo demás, el debate reciente á que dió lugar esta cuestión en el honorable cámara de diputados, excusa al poder ejecutivo de mayores consideraciones.

Otra de las reformas que se impone es la que se relaciona con la emisión del voto.

La ley vigente adopta el voto público como un medio de prevenir el fraude. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que el remedio es ineficaz. Si bien este sistema facilita el control y asegura la sinceridad del resultado del acto electoral, ofrece la oportunidad, á los partidos, de conocer en todo momento su situación respectiva, haciéndose difícil que el uno asista al triunfo del otro; sin haber agotado antes todos los medios para evitarlo—recursos extremos, más perniciosos para la honradez del acto electoral que cualquier fraude que pudiera atribuirse á las mesas receptoras de votos. El voto reservado evita los inconvenientes y ofrece las garantías del voto público; permite todas las medidas de control para asegurar la legalidad del acto, y ampara, en todo momento, la independencia del elector.

La continuación y renovación del registro cívico es otro punto importante de las reformas que proyecto. Tienden ellas, en esta parte, á facilitar en todo tiempo la inscripción y empadronamiento de los electores, remediando con procedimientos de gobierno la apatía ó negligencia de los ciudadanos. El juicio de tachas se simplifica y la depuración del registro se hace permanente, para que en cualquier tiempo puedan ser eliminados los electores privados del derecho de sufragio por las múltiples causas que determina la ley.

La continuación del registro por medio de un empadronamiento quinquenal, se constituye por su renovación total cada vez que el gobierno de la nación ordene el levantamiento del censo general de la población.

Esta innovación representa mayores garantías en la regularidad de la población, por el personal que interviene, y una notable economía en los gastos.

El sistema de la penalidad establecido por la ley vigente adolece de graves deficiencias.

Además de la falta de graduación conveniente de las penas con relación á los actos ú omisiones calificadas de delitos electorales, se notan deficiencias que el proyecto adjunto tiende á subsanar.

Con estas breves consideraciones entrego á la deliberación de vuestra honorabilidad, el adjunto proyecto de ley.

Dios guarde á vuestra honorabilidad.

MANUEL QUINTANA.

RAFAEL CASTILLO.

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de diputados, etc.*

Artículo 1.º La inspección de los registros electorales á efecto de que cumplan todas las disposiciones legales y decretos referentes á los mismos, queda confiada á las respectivas

cámaras de justicia federal quienes informarán al poder ejecutivo de las faltas y deficiencias que observaren.

Art. 2.º Los jefes de registro civil á cuyo cargo esté la inscripción de los votantes de cada circunscripción electoral formularán, además del registro por orden numérico, uno por orden alfabético del primer apellido de los inscriptos.

Art. 3.º La expedición de una segunda libreta solo podrá otorgarse por el jefe del registro civil respectivo con declaración jurada de quien la solicita de haber perdido la primera, acompañado de la declaración jurada de dos testigos inscriptos en el mismo registro electoral sobre la identidad del solicitante. Antes de asentarse por escrito esas declaraciones se leerá al solicitante y testigos el artículo 293 del código penal y así se hará constar en el acta.

Art. 4.º Tanto el jefe del registro civil en el caso de expedir una segunda libreta, como las autoridades civiles y militares en el caso en que un ciudadano pierda el derecho electoral en los casos enumerados por la ley de elecciones, deberán dirigirse inmediatamente á la junta electoral del distrito á efecto de que se hagan las respectivas anotaciones en la columna de observaciones en los ejemplares del registro cívico.

Art. 5.º Será rechazado de plano y sin más trámite toda tacha si no se indica en ella el motivo legal de la tacha y el número de inscripción electoral del tachado y del tachante, y del domicilio de éste.

Art. 6.º La citación de los tachados y de sus tachantes se hará por correo y por tres publicaciones en los diarios por sus nombres y número de inscripción en el registro electoral.

Como comprobación de la citación se agregará un ejemplar de cada diario al expediente.

Art. 7.º Queda prohibido el diligenciamiento de embargo de muebles en los siete días que preceden al de la elección.

Art. 8.º Desde las 8 de la noche de la víspera de la elección hasta las 12 de la noche del día en que ésta se verifique, queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas en los clubs ó comités políticos, bajo pena de multa de doscientos pesos en que ocurrirán solidariamente el presidente del club y todos los miembros de su comisión directiva.

Junio 5 de 1905.

Francisco J. Oliver.

**Sr. Presidente**—Está en discusión en general.

**Sr. Lucero**—Pido la palabra.

Voy á informar el despacho de la mayoría. Expondré sus fundamentos, sin adelantarme á las objeciones, con la claridad y precisión requeridas por la importancia de este asunto.

Hemos estudiado los tres proyectos publicados en la orden del día. El del poder ejecutivo, comprende toda la ley de elecciones. Propone que la inscripción sea una función continua, no ya periódica de las oficinas del registro civil; que el padrón se publique en carteles, no por los diarios; que el censo no sea una mera amplificación quinquenal, sino que se renueve del todo, con el censo general de la población; que las libretas se distribuyan á domicilio, por el correo ó por el servicio de policía; que se derogue el sistema electoral vigente y se establezca el de la lista; que se restablezca también el voto secreto, mejor dicho reservado; que se definan los delitos electorales en conceptos de menor alcance; que se disminuyan las penas principales y se agraven los accesorias; y en fin, que se suprima en la capital la competencia de los jueces del crimen en la sustanciación de los procesos electorales, reponiéndolos bajo la jurisdicción de los jueces federales. El del señor diputado Oliver se refiere únicamente á la inspección de los padrones, al juicio de tachas y á las diligencias para obtener el duplicado de las partidas cívicas. El del diputado que habla no contiene sino la reforma de la ley electoral, la de dos artículos de la penalidad y la del artículo sobre la competencia judicial.

Durante este trabajo, prolijo por la correlación de los proyectos entre sí y con la ley vigente, la mayoría no ha perdido de vista dos propósitos capitales: primero, que la reforma satisfaga las exigencias políticas de la actualidad, salvando los graves inconvenientes del sistema electoral vigente; segundo, que se sancione con el tiempo necesario para que pueda aplicarse en las elecciones de la próxima renovación de esta honorable cámara.

Desde luego, la reforma completa de una ley tan circunstanciada como es la ley de elecciones, tan llena de intereses públicos, como que verifica las bases mismas de las instituciones; y de intereses personales, como que concierne á las posiciones políticas, requiere para su estudio y deliberación en ambas cámaras más tiempo, mucho más tiempo del que tenemos disponible en las sesiones del presente periodo. Correríamos quizás el riesgo de que se clausurase el congreso sin haber atendido todas las reclamaciones de la ley. Para evitar este escollo en que podrían fracasar nuestros

dos propósitos, que son complementarios é inseparables, la mayoría de la comisión, sacrificando sus deseos, ha resuelto limitar su despacho á la reforma del sistema electoral.

Hay otra consideración que no debo omitir y que también ha decidido nuestra voluntad en el mismo sentido. Las deficiencias y errores de la ley tienen causas determinadas, que son conocidas de los señores diputados y de todos los que recuerdan el debate que provocó el momento en que tuvo lugar y la manera cómo terminó. No discutimos sino veintiseis artículos, de los cuales enmendamos sustancialmente veinte ó veintidos sobre el despacho de la comisión. Esta deliberación ocupó á la honorable cámara desde el 15 de octubre hasta el 4 de diciembre, es decir, cerca de un mes y medio, descartando una semana que se distrajo en las fiestas oficiales de la inauguración del puerto del Rosario.

Durante este tiempo, el debate se mantuvo en el más alto nivel de ilustración y de cortesía. Pero, comprendiendo los partidarios de la reforma que con esa lentitud y á ese paso, si para discutir la quinta parte de la ley se necesitaba tanto tiempo, no sería posible sancionarla en 1902, ni hacer el censo electoral en 1903, para darle vigencia en las elecciones de 1904; y apreciando las razones que son análogas á las que nosotros estamos apreciando ahora, clausuraron el debate, por una de esas mociones de orden que los ingleses llaman neumáticas, para expresar con una metáfora sanitaria sus efectos desobstruyentes. El resto del proyecto se sancionó, así, sin observación, en el silencio... Recuerdo la impresión que causó aquel silencio.

La mayoría de la comisión considera que semejante desenlace deprime los prestigios de la honorable cámara y es impropio de los respetos de la ley; piensa también que afecta hondamente la libertad de las opiniones parlamentarias. Pero, constreñida por la dominante lógica de las necesidades, más imperiosa siempre que la pura lógica de las ideas, piensa igualmente la mayoría de la comisión, que aquella moción de orden estaba justificada por los intereses políticos que prevalecieron.

Fuera ó no fuera mal intencionado,—yo creo, en verdad, que no lo era,—el retardo equivalía á una obstrucción. La cámara tuvo entonces que emplear el



poder de sus votos para despejarla, y en uso de su derecho la despejó.

Como es natural, la mayoría de la comisión no desea suscitar esta desagradable eventualidad que obstó á la plena deliberación de la ley vigente; y á este fin, aconseja se circunscriba el debate al estricto é inevitable terreno de la derogación del sistema uninominal.

Hay otra causa que también explica nuestra conducta, y que explica también las deficiencias y los errores de la ley.

Como se sabe, la ley electoral se sancionó durante las gestiones premonitoras de las elecciones generales de 1904. El cuerpo electoral estaba en vísperas de ser convocado para la renovación de esta cámara y para la elección de presidente y vicepresidente de la nación. Los momentos eran propicios á los más diversos y adversos intereses políticos.

Pasadas las anteriores elecciones, se habían denunciado los acuerdos con la unión cívica nacional. Además, el partido autonomista nacional acababa de sufrir una disgregación deplorable. El partido autonomista y el partido republicano estaban formándose. Las reivindicaciones del partido socialista habían adquirido los caracteres violentos que lo distinguen, tanto que fué necesario interrumpir la discusión de la ley electoral con el objeto de sancionar la ley de residencia, para expulsar á los agitadores. En fin; el grupo político que dirige el distinguido hombre público don Bernardo de Irigoyen, desataba sus vinculaciones con los demás. Había lo que se llama efervescencia de opiniones.

Las ambiciones personales y de los círculos exageraban todas las dificultades, creando un medio parlamentario muy impropio para la serena preparación y para la sana deliberación de una ley de elecciones.

Ahora bien: así como la mayoría no quiere perder su causa por la premura del período, ni desvirtuarla con mociones de clausura del debate, tampoco cree prudente arriesgar el éxito de una reforma íntegra de la ley de elecciones en condiciones desfavorables, análogas á aquellas, á las cuales se pueden imputar los defectos que se trataría de corregir.

La reforma del sistema electoral tiene cabalmente por objeto alterar estas condiciones de tal manera, que las de-

nás reformas que fueren necesarias en la ley se discutan en un ambiente más tranquilo y en nombre de las razones más extensas, más considerables, más impersonales que las que promueve la derogación del sistema uninominal.

Explicados así los motivos que han inducido á la mayoría de la comisión á encerrar su despacho dentro de la sola enmienda del sistema electoral, debo ahora definir las exigencias políticas que le han dado la forma en que viene presentado, es decir, debo demostrar que el restablecimiento de la elección por lista satisface las necesidades de la situación que atravesamos. Planteo la reforma sobre estas dos proposiciones, de la situación y de sus necesidades; porque ellas responden al criterio positivo, que la inspira y la sostiene.

La situación podría calificarse como una reintegración de las opiniones. La extrema división de partidos, bajo cuya influencia se dictó la ley vigente, tiende á desaparecer por una de esas reacciones unificantes frecuentes en la vida política nacional, que es una continua alternativa de acuerdos y de intransigencias.

Los adversarios de hace tres años son correligionarios en este momento; sus jefes han firmado un pacto, preciso en sus fines, contra el partido gobernante. Encauzada la oposición, es un deber del gobierno, de que formamos parte, prepararle un campo apropiado á la heterogeneidad de sus elementos. Este campo es el distrito constitucional de la elección por lista, que en nuestro país y en todos los países donde se ha practicado, ha servido eficazmente á la política de las coaliciones. Su virtud, dentro de todos los vicios que le son comunes con los demás sistemas electorales, su virtud, como factor de conjunciones partidistas, está demostrada por la historia parlamentaria de los estados en que ha regido. Cada vez que en Francia ó en Italia se ha adoptado la lista, las diversas tendencias de la opinión se han reunido al rededor de una política impersonal, de propósitos generales; y cada vez que la lista ha sido derogada y substituida por el sistema uninominal, este sistema ha producido los efectos que son de su propio resorte, disociando los grupos antes convergentes.

Así, para no detallar una exposición histórica ajena á nuestro país, describiendo las numerosas circunstancias que

han traído el frecuente cambio de los dos sistemas electorales, así ha sucedido principalmente con las reformas de 1874, de 1885 y de 1889, en Francia.

En 1874, los grandes intereses nacionales defendidos por la elocuencia de Gambetta, un electo de la circunscripción, encontraron su representación en la lista, que unificó á todos los círculos republicanos, cooperando al resurgimiento de la nación, abatida por la guerra. Vuelta la circunscripción en 1885, la lucha entre las fracciones de Ferry y Clemenceau promovió idéntica necesidad.

Sancionada la lista tuvo por consecuencia congregar á todos los defensores de la república. Pero, congregó también á los adversarios, tan alertas y entendidos, que pocos años después, en 1889, las alianzas boulangistas amenazaban la existencia misma de la institución democrática. Floquet, jefe del gabinete, uno de los campeones del distrito en 1874, Floquet disolvió esas alianzas, poniendo en vigencia el sistema uninominal, con tanta ventaja, que aquel gallardo y popular Boulanger acabó en un poético suicidio, mientras sus prestigios se enfriaban en el prosaico debate de los intereses municipales, llevados al gobierno por la circunscripción electoral.

Estos hechos, señor presidente, no sólo prueban los efectos extremos y opuestos de los dos sistemas, sino también que nos enseñan como en aquellos gobiernos, dignos de servirnos de modelo por su conducta política, la cuestión de escrutinio no es nunca una cuestión de consecuencia con las propias opiniones sino esencial y formalmente, una cuestión de oportunidad política, que se soluciona según lo demanden las necesidades del estado, atendidas por hombres políticos, leales y resueltos, que no confunden jamás la obstinación con la fidelidad, ni la permanencia de los principios con la variabilidad de las conveniencias públicas.

En nuestro país, la lista ha favorecido los acuerdos que han realizado la excelente política, que más de una vez nos ha salvado de la anarquía y que en los últimos años ha sido la firme base del orden, de la riqueza y de la paz que disfrutamos.

La aplicación del sistema uninominal, por el contrario, ha impedido las coaliciones que se diseñaban en los preliminares de la convención de octubre de

1903, tanto que en aquel acto fueron muy pocos los concurrentes no alistados en el partido autonomista nacional. Esta acción disgregante se ha confirmado en las elecciones de 1904, donde todos los partidos y aun el partido nacional se han fraccionado dentro de las circunscripciones.

¿Era propósito deliberado esta pulverización de las opiniones? No estoy habilitado para afirmarlo; pero es permitido suponerlo ante la profunda sagacidad y la fría y elevada inteligencia que se revelaban como causa de aquel espectáculo de la elección presidencial, en que la fórmula de la convención de octubre aparecía irresistible ante sus tenaces adversarios desconcertados.

La interpretación más correcta de estos antecedentes favorece á la reforma. Del ejemplo de la Francia se deriva otra prueba, tanto más computable, cuanto mayor alcance tiene la diferencia de instituciones entre la renovación parlamentaria íntegra, que se efectúa en Francia y la renovación parlamentaria por mitad que se hace entre nosotros. Porque no ha de negarse que las coaliciones son más factibles en la renovación parlamentaria íntegra, desde que entre nosotros, con la renovación por mitad, los partidos que quieran unirse tendrán de antemano que someterse á la peligrosa contingencia de que las circunscripciones sufragantes no sean aquellas en que tengan más elementos ó mejores probabilidades.

Por otra parte, la confluencia de los partidos necesita de la lista, que le proporciona la única posibilidad de entenderse para colocar sus contradicciones en el número de candidatos de la capital y de las provincias; porque, es evidente que sin renunciar á esas contradicciones, que son los propósitos partidistas, no han de ponerse de acuerdo en el candidato único de la circunscripción, quien humanamente no puede militar con sinceridad en más de un partido, salvo cualidades proteiformes de carácter, que desvalorizarían su influencia.

Nuestra política anterior de lista corroboraba estos asertos, con la eficacia electoral y parlamentaria de los acuerdos.

La contraprueba se ha cumplido en las circunscripciones con exactitud. Casi todos los grupos políticos se han subdividido en todas las circunscripciones de la capital, excepto la de Palermo...

**Sr. Varela Ortiz**—También en Palermo. Tuve por rivales al partido republicano y al partido nacional, cuyos candidatos eran el señor Garro y el señor Bollini. Pocos votos, pero en fin... (*Risas*).

**Sr. Lucero**—Esta disgregación de los partidos se ha hecho entre dos ó varios candidatos, quienes actuando por venalidad sobre un reducido colegio electoral se sentían, mientras tenían dinero, con fuerzas bastantes para prescindir de sus deberes partidistas, sin preocuparse de la voluntad que expresaban los comités, que de su parte eran impotentes para impedir el fraccionamiento de sus elementos, lo que ha dado esta consecuencia, aun más lamentable, de haber determinado con frecuencia, en el mayor número, si no en todas las circunscripciones de la capital, el triunfo de los comicios hacia la más erritante minoría electoral, contra toda justicia política y contra toda doctrina de la constitución.

Dentro de estas observaciones prácticas, en la acepción de que son históricas y positivas, -porque ya no sería permitido tratar esta cuestión del escrutinio de la manera teórica, doctrinaria y exegética en que se trató antes,—dentro de estas observaciones reales, la mayoría de la comisión, en el orden de las ideas manifestadas por el señor presidente de la República, está persuadida de que la libertad de sufragio no se realizará en nuestro país sino por la acción y la mutua reacción de los grandes partidos, bajo un gobierno respetuoso de las instituciones.

Ese gobierno lo tenemos, señor presidente, probándose en todos sus actos como fiel cumplidor de sus promesas; pero aquellos grandes partidos nos faltan, concurriendo á todas las elecciones, para medirse y para controlarse, como buenos defensores de sus propósitos.

La lista ha formado y ha robustecido la única agrupación existente, digna de este calificativo de gran partido. Más de un pacto, más de una alianza, más de una coincidencia, más de una conciliación, más de un acuerdo, para denominar con sus designaciones históricas los sucesivos procesos amalgamantes de la política argentina, desde 1852 hasta nuestros días, han operado el engrandecimiento y poderío del partido autonomista nacional. Federales soberbios y fanáticos, unitarios elegantes, austeros

nacionalistas, fervorosos enamorados de la patria, desmelenada bajo el gorro frigio; autonomistas, porteños, viejos, exquisitos de cultura é insoportables de pasión lugareña... todos, jóvenes ilusionados por las esperanzas ó ancianos entristecidos por los destierros todos hombres de buena voluntad, aproximándose, entendiéndose, lo han fortificado y lo han educado, sin renegar de sus ídolos ni abdicar de sus principios, á cual más excelentes todos sus principios, porque nadie podía reivindicar el honor de su propiedad exclusiva desde que todos se entusiasmaban por la constitución y por la libertad con los mismos afanes y con las mismas convicciones (*¡Muy bien!*)

Sus adversarios, residuos de grupos allegados á sus filas ó disgregaciones de su propio cuerpo, sus adversarios han desempeñado el papel de víctimas ó el de verdugos, absteniéndose, previo el consabido manifiesto, de concurrir á las elecciones, ó derrocando los gobiernos establecidos ó pregonando su descrédito, sin consideración alguna á los intereses exteriores del país. El atraso, el descontento, hasta la pobreza explicaban su impotencia, agitada y dolorosa. Los gobiernos de fuerza justificaban las reclamaciones por la fuerza; y la moral política, señor, se detenía perpleja, in pronunciar su fallo en esta causa, penosa, trágica ó grotesca, según el lado de que se la mirase, en que no se sabía bien quiénes eran los oprimidos y quiénes los opresores, porque los últimos revolucionarios eran los penúltimos gobernantes.

Pero aquellos malos tiempos han pasado. Las últimas elecciones nacionales y provinciales, cada vez que los partidos han concurrido, controlándose en la legalidad electoral, han satisfecho las mejores garantías del sufragio, compatibles con nuestro modo de ser y con el grado de civilización que hemos alcanzado. Este notable progreso de la conducta pública abre nuevos y luminosos horizontes. Es nuestro deber no obscurcerlos; es nuestro deber no debilitar en la inercia las fuerzas del partido nacional ni retardar la necesaria alianza de sus impugnadores. La circunscripción es un obstáculo á estos propósitos esenciales. Su política estrecha, sin beneficios, sin dignidad, disuelve los partidos en una lucha de intereses inmediatos, que con frecuencia no son sino intereses personales. La reforma remue-

ve este escollo. Entraña un estímulo de reorganización y un vínculo de conjunciones. Sobre estas bases, el constitucionalismo absoluto del gobierno, cuya fórmula reside en la imparcialidad insospechable del señor presidente de la República, fomentará la noble contienda con todos los prestigios del orden y de la legalidad.

De esta manera nos habremos evitado el espectáculo de un gran partido, enervado por la debilidad de sus adversarios, acantonado en posiciones oficiales, inorgánico en sus colosales elementos conservadores, económicos y políticos, blanco insensible de la prédica periodística, que mina su popularidad, indiferente a los contrastes parciales en los pequeños comicios, donde solamente caben, con la más abominable venalidad por instrumento, la ambición del candidato como propósito y una infima política como pretexto.

Así, señor presidente, esos nuevos horizontes serán el digno escenario de las diversidades de la opinión, restablecida en el terreno provincial, federal, que es donde la constitución ha querido que se ventilen sus saludables diferencias, que no pueden trasladarse a la circunscripción, lugar político artificioso, que ha violentado las prescripciones fundamentales.

Creo inútil reeditar los orígenes, el desarrollo y las proyecciones de esta afirmación. El debate, agotado hace tres años, no podría renovarse, sin repetir: lo que sería fastidioso, cuando menos, si, por abuso de librería, no llegase a ser agravante para la ilustración de la honorable cámara.

Como se sabe, las opiniones extremas no han sido sometidas al fallo de la Suprema corte, que es donde funciona el único criterio capaz de infundirles un carácter positivo, intergiversable. No hay lugar, entonces, a recomenzar los juegos florales sobre derecho constitucional, disertaciones que no convencerán a nadie sobre los puntos controvertidos y que no tendrán otro resultado que el de recomendar la elocuencia y la biblioteca de los oradores que quieran campear en esta lid ya trillada, donde cada uno tiene su opinión, sin frases y fuera del alcance de las frases. *(¡Muy bien!)*

La nuestra es contraria a la constitución del sistema uninominal. La mayoría de la comisión piensa que el sistema propuesto de la lista está definido en

la constitución fuera de toda duda; mientras que el sistema de la circunscripción no lo está, sino dentro de toda duda. No vacilamos en hacer estas declaraciones ante la honorable cámara la mitad de cuyos miembros proviene de las circunscripción, porque estas opiniones carecen de alcances legales y judiciales. No se afecta con ellas la autenticidad del mandato, la legitimidad de la investidura, ni la fuerza de la sanción; y por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que la sanción del congreso es la primera presunción de constitucionalidad de las leyes, contra la cual no pueden ni lesionarla ni modificarla, las opiniones contrarias vertidas, en los informes y en la discusión. *(¡Muy bien!)*

Pero la declaración de estas opiniones es, en cambio, una razón final para volver al único sistema compatible con la constitución, que no ha querido, que no ha podido querer, porque sería absurdo, porque hubiera sido inaudito en la legislación mundial privar a la mitad del cuerpo electoral de su derecho expreso, terminante, de su perfecto derecho, de concurrir a la renovación bienal de esta cámara.

Esta aseveración irrefutable (invito especialmente a que sea refutada) correlacionada con el hecho, que no podrá negarse (invito especialmente a que se niegue) de que en países en que gobierna el sistema uninominal, la renovación se hace íntegramente y no por mitad como entre nosotros, esta aseveración, insisto, es el núcleo de nuestro convencimiento, el centro indestructible, donde se han quebrado y quebrarán las impugnaciones.

Dejo a los adversarios del despacho el placer de reiterarlas. De mi parte, como miembro informante de la comisión, doy por terminada la misión con que he sido honrado, resumiéndola en los objetivos primordiales de que reintegramos las luchas eleccionarias al distrito constitucional—capital y provincias—dándoles un sistema electoral indispensable a la formación de los grandes partidos que discutan los grandes intereses del país en una política de ideas y de propósitos generales, en una política respetable é impersonal, que no corrompa en la venalidad el cuerpo de electores, ni comprometa en un juego de pequeñas ventajas el progreso moral de la república.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en la barra.*)

**Sr. Mugica**—Pido la palabra.

Voy á fundar, á mi vez, señor presidente, el dictamen de la comisión en minoría, que he tenido la satisfacción de subscribir en grata compañía con el señor diputado por la capital con quien hemos coincidido en una misma proposición y en un mismo pensamiento fundamental, si bien podemos mantener en la apreciación de ciertos aspectos de este asunto algunas divergencias de detalle, que han de manifestarse en los ulteriores desenvolvimientos de este debate.

Diré, desde luego, aunque esto pueda parecer una ingenuidad, que no abrigo mayores ilusiones sobre el éxito inmediato de nuestro proyecto; reconozco de antemano, que el esfuerzo de nuestra argumentación, aun cuando pudiéramos producirla con todos los prestigios del saber, de la autoridad y de la experiencia, y aun cuando pudiéramos, también, presentarlo revestido con el hermoso ropaje con que el señor diputado por Tucumán sabe embellecer su pensamiento y su palabra, probablemente resultaría ineficaz para decidir el voto de la honorable cámara.

Y en efecto, señor presidente: esa vieja muestra que se llama la experiencia y que eternamente renueva sus lecciones, produciendo grandes beneficios á los que son capaces de aprovecharlos, nos enseña que en cuestiones de esta índole las mayorías parlamentarias no surgen generalmente de la discusión, pues no son, sino en casos muy excepcionales, el resultado de la mayor ó menor eficacia de los argumentos aducidos en el debate; se forman, casi constantemente por otros motivos, también respetables sin duda, pero que, forzoso es reconocerlo, no siempre están de acuerdo con la razón ni interpretan las verdaderas conveniencias públicas.

De todas maneras, cualesquiera que sean los resultados de esta jornada parlamentaria, que ojalá beneficien el porvenir del país, yo, amparándome en una teoría oportunamente desenvuelta por el señor diputado Carbó en una de las sesiones anteriores, teoría según la cual los discursos que los diputados pronuncian no tienen por exclusivo objeto llevar el convencimiento al ánimo de sus colegas, sino exponer con la amplitud que la materia reclama las razones y los argumentos que han de servir de

fundamento á su voto, voy á llenar, en este debate, un programa modesto pero que satisface por completo mis aspiraciones y mis propósitos: decir sencillamente lo que pienso, como fruto de mis estudios, de mis reflexiones, y también de mi propia experiencia; y proponer lo que creo realmente conveniente para los intereses permanentes del país, apartando de mi espíritu, en cuanto dependa de mi voluntad, las preocupaciones, los prejuicios y otras causas perturbadoras, que suelen oscurecer el criterio de los hombres políticos cuando discuten asuntos de esta naturaleza. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Ante todo, reasumiré los antecedentes más ó menos inmediatos de esta discusión. Hace tres años, el poder ejecutivo, presidido entonces por el señor general Roca, creyó necesario reproducir una iniciativa que en épocas diversas había llegado hasta el seno del parlamento, sin obtener, desgraciadamente el éxito de una sanción definitiva y completa.

Aquella iniciativa tenía por objeto abandonar el viejo régimen electoral que había imperado en la república con resultados deficientes, durante más de cincuenta años consecutivos, es decir, desde los primeros días de la organización constitucional del país. Y cuando digo con resultados deficientes, es porque no quiero, sistemáticamente, emplear calificaciones que puedan considerarse apasionadas ó excesivas; pero confieso honradamente que á no ser por estos escrúpulos, hubiera preferido decir: con resultados desastrosos.

El congreso, en presencia de aquella iniciativa y después de un debate que alcanzó proporciones considerables, adoptó la reforma propuesta, y desde entonces, por primera vez en medio siglo de vida constitucional, lo que representa un fenómeno único en la historia contemporánea de los pueblos civilizados, la República Argentina pudo realizar una elección por un sistema que no fuera el vetusto sistema de la lista, agravado por el régimen absurdo de la simple pluralidad de sufragios.

Esta sanción del honorable congreso no debió sorprender á nadie. La reforma llegaba hasta él auspiciada y prestigiada por grandes fuerzas morales que hacían su triunfo inevitable. Los hombres más representativos y más estrechamente vinculados con las fuerzas políticas que entonces actuaban en la

República y que tenían natural representación en esta cámara le prestaban su concurso decidido. Roca desde el gobierno y Pellegrini desde la oposición, la sostenían con un empeño, con una decisión, con una franqueza que no podía ser sino el resultado de convicciones arraigadas y patrióticas. Mitre é Irigoyen en el crepúsculo luminoso de una vida respetable consagrada por entero al servicio de la República, le prestaban también el fecundo calor de sus simpatías. Y si á estos nombres agregamos muchos otros, tantas veces repetidos y por cierto no menos ilustres, que en diversas épocas y circunstancias quedaron vinculados á iniciativas semejantes: si mencionamos á Sarmiento, aquel infatigable engendrador de ideas que no dejó una sola faz, un solo aspecto de nuestra vida nacional contemporánea sin imprimirle el sello de sus geniales iniciativas; (*¡Muy bien!*) si citamos á Vélez, el hijo docto de la docta Córdoba, tan experto y eficaz en sus procedimientos como profundo y sólido en su ciencia; si evocamos el recuerdo apacible de Rawson, que amó nuestra constitución con el amor más puro que hayan podido inspirar á los hombres, los estatutos que consagran sus derechos fundamentales; si recordamos además á Avellaneda, el más flexible de nuestros hombres de estado, artista en el manejo de la palabra y artista también en el manejo del gobierno, y que sin embargo fué conducido á implantar en nuestro país la política enervadora de la conciliación y del acuerdo, quizás porque las consecuencias monstruosas de la lista le obligaron á gobernar transando á cada paso con la revolución y con el desorden; (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) si citamos por último á del Valle, que tantas veces iluminó este recinto con los resplandores refulgentes de su poderosa elocuencia; y si citamos á Gallo, á Leguizamón, á Estrada y á Achával Rodríguez y á toda esa pléyade ilustre, cuyo paso desgraciadamente fugaz en la escena de nuestra vida pública queda sin embargo señalado por una hermosa estela, donde confunden sus matices las luces de la virtud, del patriotismo y de la ciencia; tendremos que convenir, aunque la mayoría de la comisión opine lo contrario, que el pensamiento nacional en esta materia estaba de antemano expuesto por sus más altos, por sus más brillantes y por sus más fidedignos exponentes! (*Aplau-*

*dos prolongados en las bancas y en la barra*).

Bien, señor presidente; adoptada la reforma, debía practicarse y se practicó con los resultados de que me ocuparé más adelante, el primer ensayo electoral con el nuevo sistema uninominal que había quedado incorporado á la legislación vigente. De ese primer ensayo resultaron electos la mitad de los miembros que componen esta cámara y también el poder ejecutivo que actualmente preside el gobierno de la nación. Pero el señor presidente de la República, en su discurso inaugural, que fué recibido en general con muestras de satisfacción y de aplauso, enunció como uno de los puntos de su programa de gobierno la reforma de la ley electoral. Y consecuente con esta enunciación, en las primeras sesiones del actual período legislativo dirigió al congreso el mensaje y el proyecto que motivan esta discusión. En ese proyecto, como lo ha recordado el señor miembro informante de la mayoría de la comisión, el poder ejecutivo proponía reformas diversas, varias de las cuales eran consideradas por él, acentuadamente, como importantes y urgentes.

Pero abordado el estudio de este asunto por la comisión de negocios constitucionales, la mayoría, por las razones que ha expuesto el señor miembro informante, creyó que era necesario, que era imprescindible ocuparse urgente y exclusivamente de la reforma relativa al sistema electoral, al cambio del régimen uninominal por el régimen del escrutinio de lista. Y el poder ejecutivo, que al principio había considerado que eran también fundamentales y urgentes algunas otras reformas aconsejadas en el proyecto, concluyó por aceptar el temperamento propuesto por la mayoría de la comisión, y la cuestión entonces quedó reducida á estos dos términos excluyentes: ó el escrutinio de la lista ó la elección uninominal.

Y bien, señor presidente: la minoría de la comisión tiene también claramente establecida su opinión en este dilema; pero, obediendo á un concepto más amplio, obediendo á un pensamiento menos oprimido por razones de urgencia,—cuya legitimidad no he podido explicarme satisfactoriamente á pesar de las razones expuestas por el señor miembro informante de la mayoría de la comisión,— presenta un nuevo término, abre un nuevo rum-

bo y señala la conveniencia de reformar la constitución, para que la República esté en condiciones de satisfacer necesidades premiosas de su vida orgánica, y para que pueda colocarse en materia electoral, si esto es posible, á la altura de las naciones más adelantadas de la tierra. (*¡Muy bien!*)

Voy á examinar la cuestión en cada una de estas tres facces, y me parece que ha de serme fácil demostrar que el temperamento propuesto por el poder ejecutivo y por la mayoría de la comisión es el menos aceptable de todos; que el que propone la minoría es el que ofrece mayores conveniencias para el porvenir del país, y que entre estos dos temperamentos hay otro intermedio, que si no presenta las ventajas del que ofrece la minoría, tampoco presenta los inconvenientes del que prestigan el poder ejecutivo y la mayoría; y este temperamento consiste en dejar en vigencia al menos por algún tiempo, la ley que actualmente rige la materia electoral en la República. (*¡Muy bien!*)

Pero para practicar este examen necesito establecer premisas fundamentales, que, si bien no encerrarán grandes novedades, deben no perderse de vista cuando se trata de cuestiones relacionadas con esta mezcla de ciencia y de arte que constituye la política, considerada como el conjunto de principios y de reglas que deben aplicarse en el gobierno de los pueblos.

El problema electoral es una de esas cuestiones; y considerado en las diversas facces de aplicación que presenta y en las numerosas dificultades prácticas que suscita, no constituye ciertamente, como lo ha reconocido el señor miembro informante de la mayoría, un problema exclusivamente legal ó doctrinario, que pueda ser totalmente resuelto por la sola virtud de las prescripciones consignadas en un sistema de legislación determinado, siquiera ese sistema sea absolutamente irreprochable bajo el punto de vista de las concepciones abstractas de la justicia y aun de las combinaciones matemáticas á que esta materia se presta.

En éste, como en todos los problemas políticos y sociales, intervienen un gran número de factores, cada uno de los cuales está llamado á reaccionar, en uno ú otro sentido, y con mayor ó menor intensidad, sobre cualquier solución práctica que se proponga: la educación pública, por ejemplo, que engen-

dra la capacidad cívica del ciudadano, las tradiciones, las costumbres, la influencia, en general, del pasado y de la herencia, la índole del espíritu colectivo de los pueblos, la naturaleza y carácter de las agrupaciones sociales y políticas que se forman en su seno, las preocupaciones dominantes, el régimen de gobierno adoptado, la distribución y densidad de la población, sus hábitos y condiciones económicas y hasta la configuración territorial y algunos otros accidentes físicos, son otras tantas fuerzas, otras tantas circunstancias, otros tantos factores que determinan las diversas modalidades que el problema electoral presenta en todos los pueblos de la tierra. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Pero si la ley no puede por sí sola producir las soluciones apetecidas, ella constituye, dada la idiosincrasia, dada la psicología, dada la estructura de las sociedades contemporáneas, el elemento esencial, el de mayor virtualidad y eficacia para alcanzar, dentro de la relatividad y de la imperfección con que estas cosas pueden alcanzarse, los fines perseguidos, siempre que el legislador, al sancionarla, consulte y no pierda de vista todos esos factores y modalidades á que acabo de referirme.

La tarea, entonces, del estadista, del legislador, del hombre de gobierno práctico y previsor, debe ser orientada, en esta materia, por dos propósitos fundamentales: impedir que la ley contrarie ó choque violentamente con las idiosincrasias, con los rasgos característicos, con los accidentes fisonómicos del pueblo en que se ha de aplicar; pero impedir también que, á su amparo, se arraiguen y prosperen los hábitos viciosos, las tendencias perjudiciales y perturbadoras; y para eso es necesario inocular en la ley elementos morales de virtud y de fuerza, en dosis prudencial, pero en cantidad suficiente para desviar las malas tendencias y para encausar las costumbres por rumbos benéficos y saludables, que aseguren é impulsen su mejoramiento progresivo.

Y bien, señor presidente: ¿responde á estos propósitos fundamentales el proyecto del poder ejecutivo, ó el que aconseja la mayoría de la comisión? Espero demostrar que no.

Pero, para sintetizar, desde luego, el concepto general que me he formado sobre este asunto, el señor ministro del interior, que asiste á este debate, animado, sin duda, por aspiraciones sence-

ras y generosas, que yo me complazco en reconocer, ha de permitirme manifestar, con la misma sinceridad, y con todo el respeto que me inspira el poder ejecutivo, que esta iniciativa reformadora—cuyo propósito sustancial, tan admirablemente interpretado y sintetizado por la mayoría de la comisión, significa, lisa y llanamente, la regresión, por tiempo indeterminado, al más primitivo, al más atrasado y al más absurdo de los sistemas electorales conocidos, actualmente proscripto de todos los pueblos regularmente organizados—no constituye, por cierto, un programa político digno de un gobierno ilustrado y progresista, capaz de descubrir y penetrar con alto pensamiento de previsión y patriotismo, las necesidades visibles, las necesidades palpitantes de nuestra vida institucional enfermiza, que ora se desenvuelve lánguida, deprimida y anémica, ora se manifiesta en estallidos tumultuosos y turbulentos, pero acusando siempre la falta de ese vigor tranquilo, equilibrado y fecundo, de esa robustez fisiológica, si así puede decirse, que constituye la característica de aquellos pueblos más felices que el nuestro, porque han logrado identificar su espíritu con el espíritu salvador de las instituciones libres. (*Muy bien! ¡Muy bien! en las bancas.*)

He procurado, señor presidente, con todo el empeño, con toda la sinceridad de que son capaces mi voluntad y mi pensamiento, descubrir al través de mensajes y discursos, informes y explicaciones, cuáles han sido los motivos plausibles, las razones aceptables que han inspirado esta reforma propuesta por el poder ejecutivo; reforma reaccionaria en el sentido antipático de la palabra, porque ella significa evidentemente un movimiento retrógado, pues si el poder ejecutivo y la mayoría de la comisión opinan lo contrario, yo puedo invocar como mejor autoridad el criterio universal revelado experimentalmente por todos los pueblos en donde rigen y se aplican instituciones adelantadas; y declaro, señor, que no he podido encontrarlas; y he debido convenirme, al contrario, de que los que se consignan en el mensaje con que el poder ejecutivo ha tratado de prestigiar esta reforma y los que ha aducido el señor miembro informante de la mayoría, son en su conjunto enteramente ineficaces, y muchos de ellos contraproducentes, porque pueden invocarse, co-

mo lo demostraré más adelante, para probar la verdadera inconveniencia de esta reforma.

Confieso, sin embargo, que la lectura del mensaje suscrito por el señor presidente de la República y por el señor ministro del interior, ha dejado en mi espíritu impresiones favorables bajo ciertos puntos de vista.

Este documento en varios de los puntos que toca, revela, señor presidente, una sinceridad, una franqueza, casi podría decir una ingenuidad, desgraciadamente poco común en nuestros hombres de gobierno. En él se reconoce que en este país las elecciones no son libres puesto que el ejercicio del sufragio no prepondera en la República; se reconoce también que en este país no hay partidos organizados; se reconoce por último que las autoridades no prescinden como debieran en los actos electorarios.

Todo esto es verdad, señor presidente; pero si no fallan mis recuerdos, es la primera vez que el primer magistrado de la República lo declara con tanta sinceridad, con tanta franqueza y con tanta espontaneidad ante la representación nacional.

Pero lo primero que ocurre preguntan en presencia de estas manifestaciones del poder ejecutivo es lo siguiente: cuándo el poder ejecutivo ó los hombres que lo constituyen han formado este juicio tan desfavorable, pero tan exacto, de nuestra actualidad política y electoral? Y la contestación fluye también espontánea de los labios: no ha debido, no ha podido ser en las últimas elecciones generales realizadas con el sistema del escrutinio uninominal.

Y no ha podido ser en esas elecciones porque el señor presidente de la República, aun para sus adversarios, es un hombre de dignidad y altura moral indiscutibles; y no hubiera aceptado, por el solo hecho de serle favorable, el resultado de una elección realizada sin libertad, sin partidos y sin prescindencia de las autoridades; (*Muy bien! ¡muy bien!*) y el señor ministro del interior, cuyas condiciones morales son bien conocidas dentro y fuera del parlamento tampoco hubiera aceptado acompañar á un presidente elegido en semejantes condiciones.

Entonces, señor presidente, si no ha sido en las últimas elecciones, debe haber sido en las anteriores, es decir, en aquellas que se practicaban con el es-



---

Julio 5 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

10.<sup>a</sup> sesión ordinaria

---

crutinio de lista, y entonces, ¿cómo se explica que el poder ejecutivo venga á proponer el restablecimiento de la lista, para curar los males, para destruir los defectos que han sido las consecuencias de ese mismo régimen? (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las bancas y felicitaciones al orador.*)

**Sr. Varela Ortiz** — Hago moción para pasar á cuarto intermedio.

—Apoyado.

**Sr. Presidente**—Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo las 5 y 5 p. m.